

Asistencia Técnica y Extensión Rural participativa en América Latina: principales hallazgos de los estudios de casos en cuatro países

Actualmente existe una gran demanda por servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) más efectivos y eficientes, que superen el paradigma tradicional de la transferencia tecnológica y que sean capaces de incorporar a sus usuarios en todo el proceso, además de abordar los requerimientos y necesidades de la familia rural en su conjunto.

A nivel regional, los presidentes de los países latinoamericanos y caribeños, reunidos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en su Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, hacen un llamamiento para fortalecer el acceso de los agricultores familiares a los servicios rurales, entre ellos, los servicios de extensión. Si bien existen muchos modelos de extensión y de servicios de asesoría, solo algunos han avanzado en lograr una mayor participación, con un enfoque de demanda y una mirada territorial. A nivel mundial, se estima que el enfoque de extensión participativa es lo que más se aproxima a ello.

En el estudio “La Asistencia Técnica y Extensión Rural participativa en América Latina”, elaborado por FAO y RELASER, se describe el contexto general de los servicios de ATER participativa en América Latina y se lleva a cabo un análisis de casos en cuatro países: Programa Campesino a Campesino de Nicaragua, Modelo yapuchiris de Bolivia, Pastoral de la Tierra en Guatemala y Proyecto Mi Chacra Emprendedora-Haku Wiñay en Perú. En el estudio se analizan las características de los usuarios de los servicios de extensión, el marco conceptual utilizado, el financiamiento y su sostenibilidad, la gobernanza y su organización interna, los componentes del sistema y sus roles y funciones; y se concluye con los efectos e impactos que se han podido identificar a partir del análisis.

Recomendaciones y lineamientos para el diseño de políticas

Los servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) son un importante instrumento para fortalecer a los agricultores familiares, mejorando su desempeño productivo, su calidad nutricional, sus ingresos y, en última instancia, su calidad de vida.

Es particularmente importante contar con servicios de ATER que respondan a las demandas de los usuarios y que los involucren al máximo en su implementación.

Un modelo potente para llegar a los pequeños productores con eficacia y participación es la Asistencia Técnica y Extensión Rural participativa, un modelo desarrollado bajo diferentes nombres y modelos en América Latina: yachachiq, campesino a campesino, promotoría rural humana, Escuelas de Campo de Agricultores, entre otros.



En general se ha optado por los servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural participativa bajo las siguientes condiciones:

- Contextos con ausencia del Estado en la prestación de servicios de extensión agrícola frente a la potencial demanda.
- Políticas orientadas a los productores más vulnerables con un enfoque pro-pobre.
- Demanda de productoras y productores de ATER con enfoque de sistemas, que considere a la finca como *un todo*.
- Alta vulnerabilidad ambiental, ocasionada por el manejo inadecuado de la base productiva y/o por condiciones climáticas.
- Estancamiento en la producción y productividad de granos básicos y otros productos, que resulta en inseguridad alimentaria.

La población objetivo en todos los casos son familias de escasos recursos que producen en ambientes desfavorables, sin -o con poco- acceso a servicios de apoyo.¹ En los casos estudiados destaca el rol de las instituciones que facilitan los procesos de ATER participativa. Estos programas operan en un contexto descentralizado, donde las instituciones que organizan y facilitan los recursos se comprometen a una forma diferente de hacer extensión, entregando más capacidad de decisión y confianza a los productores y sus propias organizaciones (cooperativas, federaciones de productores, etc.).

¹ Si bien se ha usado esta metodología para esta población, no existe ningún argumento que respalde la idea de que esta no se pueda usar con otro tipo de usuarios y tener buenos resultados.

Los casos analizados comprueban que un programa de ATER participativa basado en promotores y sustentado en la confianza, solidaridad y voluntariedad de los mismos, puede escalar, cubrir territorios y población significativa, al tiempo que constituye también una excelente modalidad para gestionar el conocimiento local y ancestral de los productores, combinándolos con los conocimientos externos.²

Los riesgos para la sostenibilidad de un sistema de esta naturaleza son, en primer lugar, la tensión entre prestar servicios no remunerados y la dedicación a su propia finca.

Un segundo riesgo es que los promotores adquieran, a través de este mismo trabajo, un liderazgo comunitario o técnico de mayor nivel, y se pierda para el territorio una capacidad en la cual se ha invertido.

Los estudios de caso demuestran que el financiamiento en su mayor parte (Guatemala, Bolivia y Nicaragua) proviene de fondos de cooperación, aunque existe una tendencia al incremento en los aportes estatales para el financiamiento.

En este sentido, resulta importante que los programas se enfoquen en hacer incidencia política con las instituciones del Estado, para que estas asuman dicha forma de extensión.

La tendencia en América Latina es que los Estados están volviendo a invertir en los servicios de asesoría rural. La sistematización de las experiencias de ATER participativa puede ser útil para la generación de políticas más efectivas y eficientes para mejorar tanto los ingresos como la calidad de vida del habitante rural.

² Es necesario fortalecer esta visión, pues destaca la importancia de las alianzas con las instituciones de investigación o universidades, que en la actualidad se encuentran ausentes en la mayor parte de los casos.



Hallazgos del estudio

1 Indicadores básicos:

Los cuatro programas analizados tienen una amplia cobertura territorial. Esto se encuentra relacionado con la institucionalidad que los apoya, y no tanto con factores metodológicos. Los dos programas más grandes -casos peruano y nicaragüense- están dirigidos por el Estado el primero, y por una organización gremial de productores el segundo. Ambos han sido capaces de escalar el programa debido a su amplia presencia territorial, capacidad de dirección, unidad metodológica y acceso a conocimientos y a las redes de innovación.

3 Financiamiento:

Los estudios de caso demuestran que el financiamiento en su mayor parte (Guatemala, Bolivia y Nicaragua) proviene de fondos de cooperación, aunque existe una tendencia hacia su disminución, y al aumento del financiamiento estatal. Por eso es importante que los programas se enfoquen en hacer incidencia política con las instituciones del Estado para que asuman esta forma de la extensión. Los Servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural participativa son de menor costo que los tradicionales, puesto que en la mayor parte de los casos los promotores no reciben un salario por su trabajo.

Resumen de indicadores básicos

INDICADOR	BOLIVIA	PERÚ	NICARAGUA	GUATEMALA
Cobertura	4 provincias	43 distritos	85 municipios	2 departamentos
N.º familias	575	90 000	23 000	564
N.º promotores	95	2 700	2 500	139
N.º familias/promotor	6	33	9	4
Años de experiencia	8	20	24	5

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso

La población objetivo en todos los casos son familias de escasos recursos que producen en ambientes desfavorables, sin –o con poco- acceso a servicios de apoyo. El promedio de edad de los promotores bordea los 45 años, y la participación de la mujer promotora es de 25% en promedio.

El aprendizaje recogido de todos los casos estudiados es que los programas deben desarrollarse con la mayor especificidad posible: un programa enfocado en un único cultivo durante uno o dos ciclos productivos y con un número limitado de intervenciones tiene un ratio de éxito usualmente más alto que el de otros programas más complicados y multifacéticos.

Esto es argumentable, pues si bien el sistema ideológicamente concibe un promotor que actúa para aportar a la comunidad, es evidente que en programas de largo plazo no se puede asumir que el promotor pueda destinarle una gran cantidad de tiempo. En la práctica se han abierto varias iniciativas de financiamiento, como son la venta de bioinsumos y la fumigación de parcelas en el caso de Bolivia. El caso peruano destaca en tanto que el Estado, a través del programa, prevé un pago del salario mínimo vital para los yachachiq, lo que lo hace más caro que los casos anteriores pero aún mucho más barata que la extensión clásica.

2 Organización del sistema y gobernanza:

Tres de los cuatro casos muestran sistemas descentralizados, donde la mayor parte de las decisiones son tomadas a nivel local -a excepción de Guatemala, que es liderado por la Iglesia Católica. Esto evidencia un esfuerzo por involucrar a las instituciones locales y municipalidades en la gestión y financiamiento de los programas, con resultados variados que dependen de la decisión y compromiso de cada autoridad local.

Destacan los casos de Bolivia y Nicaragua, donde el sistema es dirigido por organizaciones de productores, lo que resulta en servicios muy concretos para sus socios. Además, al encontrarse bajo el paraguas de organizaciones de productores, la tendencia es hacia una mayor descentralización de las decisiones.

En cuanto a organización y gobernanza a nivel territorial, los casos de Perú y Bolivia destacan por otorgar atribuciones a los usuarios en distintos niveles, por la relación con la institucionalidad local, la administración de los recursos de inversión y la evaluación del funcionamiento del sistema.



4 Metodología:

Los sistemas de ATER participativa se estructuran mediante los siguientes aspectos:

- **Asamblea comunitaria:** se decide e informa desde un principio a través de los canales formales de organización. En el caso peruano, que es liderado por el Estado, se crean núcleos gestores que corresponden a dichas estructuras.
- **Identificación y selección de promotores:** basado en distintos atributos, como su capacidad de innovación, su prestigio como productor, su responsabilidad y compromiso con la comunidad y su liderazgo.
- **Fortalecimiento de capacidades:** en todos los casos se considera importante que el promotor mejore sus capacidades. Sin embargo, el análisis de los casos lleva a la conclusión de que no existe un programa sistemático de formación de promotores, ni de certificación de los mismos. En todos los casos analizados se dictan cursos técnicos para resolver temas específicos.
- **Diagnóstico rural participativo:** etapa clave en el proceso donde un instrumento metodológico muy usado es el mapa parlante.
- **Seguimiento y evaluación.**

5 Relaciones institucionales:

Se observa que el programa conducido desde el Estado -caso peruano- es el que logra una mayor diversidad de relaciones institucionales con aportes en temas específicos. Si bien hay una multiplicidad de acuerdos, no se aprecia un proceso de articulación institucional que tienda a

fortalecer el programa y asegurar su sostenibilidad. En los otros programas, dirigidos por actores privados, se evidencia una mayor debilidad para establecer acuerdos con instituciones públicas, especialmente de investigación e innovación. La tendencia más generalizada es a carecer de relaciones institucionales con el sector.

6 Efectos e impactos:

Los programas de ATER participativa han implicado el surgimiento y validación a nivel local e institucional de agentes de cambio hacia la innovación agropecuaria. Los promotores se han transformado progresivamente en líderes comunitarios.

Los programas han evidenciado la importancia de actuar en dos niveles: ingresos y calidad de vida. Las evaluaciones cualitativas demuestran que para la familia es tan importante que se generen nuevos ingresos, como que se entreguen soluciones adecuadas a su realidad para tener una mejor calidad de vida. La recuperación de los sistemas de producción y la producción propia de al menos una parte de los insumos que requiere la producción es muy valorada por los usuarios.

Las soluciones tecnológicas han permitido saltos en la productividad que son del orden del 30% en el programa Haku Wiñay en Perú, y de un 25% en Nicaragua.

Se han identificado también otros efectos relevantes, resultado de estos programas, tales como el fortalecimiento de la organización local y de los valores culturales de las comunidades, así como la participación de la mujer, tanto en su rol de usuarias como de promotoras.³

³ Es importante que el rol de jóvenes rurales a pesar de no ser tratado en este estudio sea un área de posible análisis e intervención en el futuro.

Lecturas adicionales



Esta nota de política se extrajo del documento “La Asistencia Técnica y Extensión Rural participativa en América Latina”, elaborado por la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el apoyo de la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER). El estudio está disponible haciendo click AQUÍ.

© FAO, 2016
I5977S/107.16